

sobre el diagnóstico y las posibles intervenciones de políticas públicas en torno a dos temas principales:

- Desafíos del tráfico de drogas a nivel local y nacional
- Violencia juvenil y accionar policial

En ambos temas se presentaron experiencias internacionales así como un diagnóstico compartido sobre la magnitud de los problemas en América Latina. Estas presentaciones estuvieron a cargo de expertos internacionales que establecieron aportes sustantivos a la capacidad de respuesta subnacional a estos fenómenos. Los debates desarrollados durante la reunión de la mañana fueron fortalecidos en el marco de un seminario abierto que contó con la presencia de más de 300 asistentes de diversos espacios de la administración pública e instituciones policiales provinciales de Argentina.

Los aprendizajes son múltiples y se pueden ordenar sobre 10 áreas críticas que sirven de avance no solo para la realidad Argentina sino también de otros contextos nacionales. Especialmente la implementación de iniciativas de política a nivel subnacional ha sido poco abordada en el debate general.

1. La importancia del diagnóstico focalizado
2. Fortalecimiento de capacidades policiales
3. Especialización y coordinación con el Ministerio Público
4. Tecnología y Seguridad pueden ir de la mano
5. Control civil en Seguridad Pública
6. Respuestas regionales integrales y coordinadas
7. Los problemas de convivencia
8. Violencia como forma de resolución de conflictos cotidianos
9. Desafíos para enfrentar el uso de violencia por parte de los jóvenes
10. Drogas y la presencia territorial del Estado

A continuación se describen las áreas críticas mencionadas previamente desde una perspectiva integradora del debate y con espíritu de generación de un cuerpo de discusión sobre temas claves en América Latina.

“La inversión en sistemas de información serios, rápidos y operativos permite mejorar la toma de decisiones así como identificar si los esfuerzos tienen resultados.”

La importancia del diagnóstico focalizado

Es cada vez más evidente que enfrentamos problemas globales con claras expresiones barriales que deben ser reconocidas para la toma de decisiones. De

esta forma, la inversión en sistemas de información serios, rápidos y operativos permite mejorar la toma de decisiones así como identificar si los esfuerzos tienen resultados. En ambas temáticas (droga y violencia juvenil) quedó de manifiesto la concentración del problema en espacios más bien pequeños con situaciones específicas que requieren ser enfrentadas en detalle. El patrullaje aleatorio pierde relevancia cuando se enfrentan situaciones de mayor complejidad que requieren

“Dar un paso adelante en la mirada de la prevención como un aspecto meramente disuasivo y situacional y avanzar hacia espacios de intervención integral pero de alta focalización territorial.”

de personal capacitado para enfrentar conflictos permanentes. Y la coordinación con la oferta pública de programas sociales (educación, salud, trabajo) se torna una demanda clave. De esta forma se concuerda la necesidad de dar un paso adelante en la mirada de la prevención como un aspecto meramente disuasivo y situacional y avanzar hacia espacios de intervención integral pero de alta focalización territorial.

Fortalecimiento de capacidades policiales

Incluso en aquellas provincias donde la información disponible evidencia que los problemas de inseguridad se ubican por debajo de los promedios nacionales, la necesidad de fortalecer la capacidad policial es evidente. El acuerdo transversal se centra en la capacitación inicial así como en el proceso permanente de entrenamiento de funcionarios policiales que deben enfrentar situaciones de alta variabilidad. Las experiencias internacionales mostraron que estos procesos no son necesariamente costosos o de largo plazo. Por el contrario, diversas entidades policiales han podido enfrentar cambios sustanciales en la forma como se responde a los problemas con iniciativas específicas pero constantes en el tiempo.

Especialización y coordinación con el Ministerio Público

La sensación de impunidad por parte de la ciudadanía trae de la mano desconfianza y percepción de abandono por parte del sistema de justicia criminal. Es así como la respuesta policial en sí misma es insuficiente para reconocer la necesidad ciudadana y se torna fundamental consolidar un esquema integrado de trabajo que permita cortar la metáfora de la puerta giratoria. En diversos escenarios se planteó la situación que el trabajo policial se cumple pero la justicia no hace su parte del trabajo o viceversa. En cualquier caso es un juego de suma cero dado que finalmente la impunidad frente a los hechos criminales queda como última palabra.

Tecnología y seguridad pueden ir de la mano

Especialmente la experiencia desarrollada por la Provincia de Salta con la instalación de un sistema de control del trabajo policial con alto uso de tecnología presentó resultados prometedores. Debido al tamaño de la institución policial, la implementación de estos cambios es de corto plazo y los montos de inversión son viables. Sin embargo, los resultados son notorios. Control de GPS en celulares y autos policiales, mecanismos de control integrado de emergencia, fortalecimiento de la respuesta al vecino, y disminución del tiempo de respuesta, son algunos de los resultados reconocidos en esta experiencia que sirvió para la reflexión y aprendizaje de otras provincias. De igual manera, la instalación de un sistema de control de cámaras en las principales avenidas de la ciudad permite identificar la presencia de problemas cotidianos (tránsito, vandalismo) así como de algunos hechos delictivos.

Control civil en seguridad pública

En general en Argentina el control civil sobre las políticas de seguridad pública es un elemento presente en todas las experiencias de carácter nacional y provincial presentadas durante las jornadas de trabajo. La presencia de un nutrido grupo de funcionarios públicos comprometidos con el diseño e implementación de políticas públicas es notoria y durante las jornadas de trabajo se presentaron múltiples experiencias donde este elemento está presente de forma medular. Queda aún por revisar la sustentabilidad de estos procesos y procedimientos así como la permeabilidad de los temas de derechos humanos, uso responsable de la fuerza, coproducción de la seguridad entre otros indicadores que podrían servir para identificar las mejores prácticas para fortalecer un control civil democrático en la temática.

“La amplia participación de actores de primer nivel de decisión fue una clara muestra de su compromiso con una perspectiva común de trabajo.”

Respuestas regionales integrales y coordinadas

El trabajo colaborativo entre Ministros de Seguridad y Jefes de Policía de varias provincias argentinas ayuda a establecer elementos comunes de acción, mecanismos de trabajo, y sobre todo, intercambio de experiencias. El trabajo colaborativo debe ser potenciado y la experiencia de generar sinergias trae resultados positivos. En este sentido, el Gobierno de la Nación reforzó el apoyo con inversión así como programas de prevención y control a la estrategia provincial unificada. En este sentido,

la amplia participación de actores de primer nivel de decisión fue una clara muestra de su compromiso con una perspectiva común de trabajo. Las experiencias internacionales que se debatieron mostraron además la viabilidad del trabajo regional y potenciaron la búsqueda de espacios incrementales de colaboración.

Los problemas de convivencia

La realidad provincial del norte argentino muestra que los problemas de convivencia mal resueltos son el origen de muchos de los hechos violentos. Los policías reconocen su capacidad de acción limitada frente a situaciones que requieren más de un mediador ciudadano que de un policía, pero de igual forma intentan responder a estas situaciones. Es claro que en muchos casos la formación policial es insuficiente para lograr enfrentar situaciones de abuso familiar, problemas domésticos, adicciones, entre otros problemas. Esto torna indispensable la generación de un sistema de protección social que permita apoyar con personal calificado a la ciudadanía en hechos que no son delictuales.

Violencia como forma de resolución de conflictos cotidianos

La violencia está presente en la forma como nos comunicamos e interrelacionamos. El aumento de la violencia en los centros educativos, en los eventos deportivos y al interior de las familias es solo una muestra de un problema que las instituciones policiales relevaron y reconocen poder manejar con herramientas limitadas. El uso de violencia por parte del Estado fue también debatido y se reconoce la necesidad de avanzar con mecanismos de uso adecuado de la fuerza así como estrategias de disuasión en el trabajo localizado. Cabe destacar que la mediación pacífica de conflictos así como las capacidades de negociación deberían ser incorporadas en los programas formativos de las instituciones policiales como parte del programa medular inicial de capacitación. Para de esta forma potenciar capacidades de trabajo con la ciudadanía que busquen una solución que no necesariamente implique judicialización de los problemas. Un desafío enorme para instituciones cuya labor principal es controlar y prevenir los delitos.

“Cuando se establecen espacios donde no hay presencia policial se potencian todo tipo de acciones violentas y por ende se potencia la sensación de inseguridad y de impunidad de la población.”

Violencia juvenil

Un denominador común es la presencia de espacios territoriales con alta presencia de violencia juvenil: lugares donde los homicidios y lesiones graves crecen, donde el micro tráfico de drogas avanza en la búsqueda de control territorial y donde

la presencia de pandillas, barras o grupos juveniles es evidente. Se reconoce esta situación pero la respuesta policial como única respuesta estatal es claramente insuficiente. La complejidad de estos fenómenos rebaza las capacidades policiales y una vez más recoge la necesidad de estrategias de corte estructural que partan por reconocer las raíces socioeconómicas y culturales de estos fenómenos por un lado. Pero por otro resuelvan con celeridad aquellas acciones que son netamente delictivas. Separar los problemas puede permitir que el Estado tenga mejores respuestas en plazos más breves.

Drogas y la presencia territorial del Estado

El Estado debe estar presente en todo su territorio. Ahí cuando se establecen espacios donde no hay presencia policial se potencian todo tipo de acciones violentas y por ende se potencia la sensación de inseguridad y de impunidad de la población. Así, la tarea principal de los gobiernos a nivel nacional y provincial es asegurar la presencia, especialmente en aquellos territorios donde hay mayores niveles de inseguridad y presencia de hechos de violencia. Esta definición requiere de la conformación de grupos de tarea policial específicos con metas de acción vinculadas a la pacificación y al aumento de la seguridad en territorios donde en la actualidad el Estado de Derecho tiene una presencia débil.

Sobre el Autor

Lucia Dammert es Jefa de Asesores del Subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, y actualmente se encuentra en Washington, DC en capacidad de Global Fellow en el Woodrow Wilson Center for Scholars. Dammert es Académica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos y Argentina. Durante los últimos cinco años, la Dra. Dammert se desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. Así mismo, ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de gestión pública, ha participado en programas de seguridad ciudadana en diversos países de la región, trabajando como asesora en el Ministerio del Interior de Argentina y Chile así como en la Secretaría de Seguridad Pública de México. Se desempeñó además como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y como consultor en el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Dammert es Socióloga, con un Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden, Holanda.



WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS
Jane Harman, President, Director, and CEO

BOARD OF TRUSTEES

Thomas R. Nides, Chairman

Sander R. Gerber, Vice Chairman

Public Members: James H. Billington, Librarian of Congress; John F. Kerry, Secretary, U.S. Department of State; G. Wayne Clough, Secretary, Smithsonian Institution; Arne Duncan, Secretary, U.S. Department of Education; David Ferriero, Archivist of the United States; Fred P. Hochberg, Chairman and President, Export-Import Bank; Carole Watson, Acting Chairman, National Endowment for the Humanities; Kathleen Sebelius, Secretary, U.S. Department of Health and Human Services

Private Citizen Members: Timothy Broas, John T. Casteen III, Charles Cobb, Jr., Thelma Duggin, Carlos M. Gutierrez, Susan Hutchison, Jane Watson Stetson, Barry S. Jackson

Wilson National Cabinet: Eddie & Sylvia Brown, Melva Bucksbaum & Raymond Leary, Ambassadors Sue & Chuck Cobb, Lester Crown, Thelma Duggin, Judi Flom, Sander R. Gerber, Ambassador Joseph B. Gildenhorn & Alma Gildenhorn, Harman Family Foundation, Susan Hutchison, Frank F. Islam, Willem Kooyker, Linda B. & Tobia G. Mercurio, Dr. Alexander V. Mirtchev, Wayne Rogers, Leo Zickler

THE WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS, established by Congress in 1968 and headquartered in Washington, D.C., is a living national memorial to President Wilson. The Center's mission is to commemorate the ideals and concerns of Woodrow Wilson by providing a link between the worlds of ideas and policy, while fostering research, study, discussion, and collaboration among a broad spectrum of individuals concerned with policy and scholarship in national and international affairs. Supported by public and private funds, the Center is a nonpartisan institution engaged in the study of national and world affairs. It establishes and maintains a neutral forum for free, open, and informed dialogue. Conclusions or opinions expressed in Center publications and programs are those of the authors and speakers and do not necessarily reflect the views of the Center staff, fellows, trustees, advisory groups, or any individuals or organizations that provide financial support to the Center.

ONE WOODROW WILSON PLAZA, 1300 PENNSYLVANIA AVENUE, NW, WASHINGTON, DC 20004-3027



**Wilson
Center**

SMITHSONIAN INSTITUTION
OFFICIAL BUSINESS
300\$ PENALTY FOR PRIVATE USE

Presorted First Class Mail
Postage and Fees Paid
Smithsonian Institution

G-94